

Cuando la guerra queda lejos, pero la cuenta llega igual



César Cifuentes

presidente regional PRI

Mientras el mundo observa con preocupación la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Chile comenzamos a sentir sus efectos de la manera más concreta posible: en el bolsillo. Porque aunque la guerra se desarrolle a miles de kilómetros, sus consecuencias económicas no reconocen fronteras.

El punto crítico hoy no es solo el enfrentamiento en sí, sino dónde ocurre. El foco está puesto en el Golfo Pérsico y, particularmente, en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más relevantes del planeta. Por ahí transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo. Cuando esa vía se tensiona, se bloquea o simplemente se vuelve incierta, el impacto es inmediato: sube el precio del petróleo, se encarece la energía y se altera el equilibrio económico global.

Eso es exactamente lo que estamos viendo.

Los mercados ya reaccionaron. El precio del crudo ha subido con fuerza y las proyecciones internacionales anticipan que este no será un fenómeno transitorio. La incertidumbre en Medio Oriente no solo afecta la oferta, también golpea las expectativas, y en economía eso suele ser igual o más determinante. Cuando el mercado percibe riesgo, ajusta precios. Y ese ajuste, inevitablemente, termina trasladándose a los países importadores de energía, como Chile.

Aquí es donde el problema deja de ser lejano.

Chile depende de manera significativa de la importación de petróleo. No tenemos soberanía energética en este ámbito, y aunque en los últimos años se ha avanzado en energías renovables, la matriz sigue siendo vulnerable frente a shocks externos. Cada aumento del precio internacional del crudo impacta directamente en el costo de los combustibles, del transporte y, en cadena, del costo de vida.

Lo estamos empezando a ver con claridad. El alza en las bencinas y el diésel no es una decisión local caprichosa ni una falla puntual de gestión. Es el reflejo de una presión externa que el país no puede controlar, pero sí debería haber previsto mejor.

Porque ese es el punto de fondo: la vulnerabilidad.

Chile enfrenta este escenario en una condición económica que, si bien muestra algunos avances, sigue siendo frágil. La inflación ha bajado, es cierto, y el Banco Central ha hecho un trabajo consistente en su control. Sin embargo, el crecimiento económico proyectado sigue siendo bajo, el empleo no logra consolidarse con fuerza y la inversión continúa mostrando señales de debilidad.

No entramos a esta crisis desde una posición robusta, sino desde una economía que aún no logra afirmarse completamente.

A eso se suma una restricción clave: el espacio fiscal. Durante años se instalaron expectativas altas respecto del rol del Estado como amortiguador permanente de las crisis. Se utilizó, por ejemplo, el Mecanismo de

Estabilización de Precios de los Combustibles para contener alzas y suavizar el impacto en los consumidores. Pero ese mecanismo no es infinito. Tiene límites, tiene costos, y cuando esos recursos se agotan, la realidad se impone.

Hoy estamos viendo precisamente eso.

El Estado ya no tiene la misma capacidad para contener el impacto sin generar efectos secundarios relevantes. Seguir subsidiando de manera intensiva implica tensionar aún más las cuentas públicas, en un contexto donde el déficit fiscal sigue presente y donde los ingresos no crecen al ritmo que el gasto requiere.

En otras palabras: no hay margen para seguir ocultando el problema.

Y es aquí donde la discusión se vuelve también política.

Porque frente a este escenario comienzan a aparecer voces que proponen soluciones simples a problemas complejos. Se habla de frenar alzas por decreto, de ampliar subsidios sin considerar su financiamiento o incluso de movilizar descontento social como mecanismo de presión. Es una reacción conocida, pero profundamente irresponsable.

No se puede enfrentar una crisis global con consignas locales.

La historia reciente debería habernos dejado una lección clara: cuando la política se desconecta de la realidad económica, los costos no desaparecen, solo se postergan. Y cuando finalmente llegan, lo hacen con mayor fuerza.

Chile necesita hoy algo que muchas veces escasea: realismo.

Realismo para entender que no controlamos el precio del petróleo.

Realismo para asumir que el Estado tiene límites.

Realismo para reconocer que las decisiones del pasado condicionan las opciones del presente.

Pero también se necesita visión.

Porque esta crisis vuelve a poner sobre la mesa un desafío estructural que el país ha postergado durante demasiado tiempo: la seguridad energética. No basta con reaccionar cada vez que sube el combustible. Es necesario avanzar con decisión en diversificación de la matriz, en eficiencia energética y en políticas de largo plazo que reduzcan nuestra dependencia de factores externos.

No hacerlo es condenarnos a repetir este ciclo una y otra vez.

La guerra está lejos, sí. Pero sus efectos ya están aquí.

Y lo verdaderamente preocupante no es solo el impacto inmediato, sino nuestra capacidad —o incapacidad— para enfrentarlo con seriedad, responsabilidad y sentido de realidad.

Porque en un mundo cada vez más inestable, los países que no se preparan terminan pagando siempre el costo más alto.